

evitado. Pondré un ejemplo: se dedica un número importante de páginas a cuestiones como la regulación del delito de estupro en los diferentes códigos penales o la jurisprudencia sobre capellanes en establecimientos de beneficencia; en cambio, para enterarse de las contingencias que tienen cubiertas los ministros de culto acatólicos en el sistema de la Seguridad Social hay que acudir a notas a pie de página, limitándose el autor en este caso a reproducir el contenido de las disposiciones vigentes. Otro aspecto que llama la atención es la tendencia del autor a aplicar a todo el principio de no discriminación. Tanta referencia termina produciendo cierto empacho de no discriminación, y en ocasiones empaña las cuestiones importantes; pondré otro ejemplo: en el epígrafe *inmatriculación de fincas de la Iglesia católica por el diocesano*, no se indica qué es la inmatriculación, qué se entiende por *diocesano* y qué bienes se pueden inmatricular, pero se transmite el dato de que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria es muy discriminatorio y muy inconstitucional. En la exposición se sustituyen los autores que se han ocupado del contenido del artículo y de su sentido (Roca Sastre, por ejemplo), por los que se han ocupado de su inconstitucionalidad. Aunque admito que es una opinión muy subjetiva, creo que si se eliminaran radicalmente todos los pronunciamientos que el autor hace sobre la no discriminación y sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinados preceptos, el libro, ya de por sí excelente, mejoraría mucho. En el Derecho eclesiástico español hay tres eclesiasticistas expertos en saber si la tributación de los candelabros, la expropiación de las casas de oración, la declaración testifical de los obispos o la Seguridad Social de las religiosas secularizadas es o no inconsti-

tucional. Creo que en este tipo de cuestiones es mejor reconocer las propias limitaciones y dejarlas en manos del Tribunal Constitucional y de los tres expertos.

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO

Gutiérrez del Moral, María Jesús - Cañivano, Miguel Ángel, *El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Ed Atelier, Serie Mayor, Barcelona 2003, 187 pp.

Los autores, profesores de Derecho Eclesiástico del Estado en las Universidades de Girona y Barcelona, respectivamente, dedican el libro al prof. José Antonio Souto, del que se sienten particularmente deudores. Hay un Prólogo firmado por Javier Martínez-Torrón, Catedrático de la materia referida, y notable conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como es habitual en el prof. Martínez-Torrón su exposición es brillante y sugerente. Sigue una Introducción de los autores, y los tres capítulos de los que se compone la obra. Al final del segundo y tercer capítulo se relacionan de modo sintético las ideas principales contenidas y desarrolladas en las páginas previamente escritas. Al final del libro, a su vez, se incluye la relación de las intervenciones jurisprudenciales estudiadas, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional español.

El primer capítulo se ocupa del examen de la doctrina española sobre los principios informadores del Derecho Eclesiástico del Estado. Con este acopio doctrinal, nuestros autores examinan la

jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo poniendo atención en las referencias explícitas o implícitas a los principios de Derecho Eclesiástico del Estado. En el tercer y último capítulo se pasa revista a la presencia de los principios informadores del Derecho Eclesiástico del Estado en la jurisprudencia, en este caso, del Tribunal Constitucional español, poniendo en relación esas menciones con las aportaciones, examinadas en el capítulo anterior, del Tribunal Europeo.

Con el método de estudio utilizado se pretende no sólo conocer con detenimiento lo que dice el Tribunal Europeo, nacido del Tratado de Roma, sobre los principios informadores de carácter eclesiástico, sino en qué medida y detalle coinciden con los admitidos por el Tribunal Constitucional español, o bien son diversos de éstos. Este esfuerzo de Gutiérrez del Moral y Cañivano por relacionar ambas jurisprudencias tiene un verdadero interés. La prescripción del art. 10.2 de la Constitución española hace ver, entre otras cosas, el interés del conocimiento de esta jurisprudencia europea para la interpretación correcta de nuestra propia Constitución. Pero además el desarrollo de las jurisprudencias de los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros del Consejo de Europa parece ser un factor de ayuda y enriquecimiento indudable también para el propio trabajo del Tribunal de Estrasburgo.

El título del libro no me resulta del todo satisfactorio: *El Estado frente a la libertad de religión*. Parece dar una idea de confrontación o posicionamiento hostil que, aunque puede captar más fácilmente la atención de quien ojea el libro, no es expresivo ni de la función teórica de los modernos Estados constitucionales ante el fenómeno religioso, ni de la pra-

xis habitual de éstos, en la medida en que de ser así estaríamos ante una sustancial disfunción de un Estado democrático de Derecho: que éste dificultara en lugar de garantizarlo el ejercicio de uno de los derechos fundamentales particularmente significativo de la dignidad de la persona humana. Quizá *El Estado ante la libertad de religión* hubiera sido un título más expresivo de la verdad de su contenido.

Veo que en la relación que se hace de los principios informadores, en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional española, la aconfesionalidad es colocada después de la igualdad religiosa, y no inmediatamente después de la libertad. No faltan razones para hacerlo así, pero pienso que tratar de la aconfesionalidad inmediatamente después del principio de libertad religiosa facilita una más adecuada comprensión de la íntima racionalidad y conexión entre los principios. En realidad, a mi entender, la aconfesionalidad moderna es, en primer lugar, un modo de garantizar con plenitud la libertad en materia religiosa (me estoy refiriendo, desde luego, al sistema constitucional español de Derecho Eclesiástico del Estado). Es claro que mi inspiración en este punto se debe a aquel primer y extenso estudio del Prof. Viladrich. En mi opinión, la opción constitucional, y su originalidad en la historia constitucional española, está en valorar primariamente a la persona y a la sociedad; antes que al mismo Estado. En este sentido, el entendimiento del Tribunal Constitucional español, puesto de manifiesto en algunas sentencias de 2001 y una del 2002, como oportunamente presentan los autores del libro objeto de nuestra consideración, de que la clave de los principios constitucionales en materia religiosa está en el principio de libertad, me parece

más un acierto que un «reduccionismo jurisprudencial» (p. 175).

Es claro que lo que acabo de anotar se relaciona estrechamente con lo que se ha escrito sobre la coordinación e interdependencia de los principios como una solución más matizada frente a una pretendida jerarquía entre los mismos (cfr. p. 35 y especialmente p. 176). Entiendo que no es contradictoria una verdadera prioridad entre los principios sin perjuicio de una real interdependencia entre éstos.

Deteniéndonos ahora en el cap. segundo del libro, el referente a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, me sigue llamando la atención, como dato de hecho, que, al menos, la mayor parte de las sentencias estudiadas, se refieren a conflictos referentes a la libertad de religión, no de ideología o pensamiento. Sin duda la relación entre ambos objetos es estrecha y la doctrina relativa a la garantía de la libertad religiosa ayuda a la comprensión y discernimiento de los problemas relativos a la garantía de la libertad ideológica. Sin embargo, el dato que apunto me reafirma en entender que la religión y su garantía en la vida social de los Estados tiene una especificidad, una identidad, que conviene mantener y delimitar en interés de todo ciudadano, porque responde a la realidad de la experiencia humana y social.

En las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ve que la libertad religiosa es el principal principio. La igualdad se contempla más bien como no discriminación, y no se ve incompatible, de entrada, con la existencia de las Iglesias de Estado. Debido a esto mismo, la laicidad no es un principio y la cooperación tampoco es asumida como principio, en cuanto tal (cfr. pp. 129

y ss.). Entre los fundamentos jurídicos básicos para hacer real y no solo formal la unidad europea encontramos indudablemente *un mínimo* de libertad religiosa, igual para todos los ciudadanos y Confesiones. Se trata, podríamos decir, de una aspiración de mínimos, quizá modesta, pero decisiva, para que el basamento jurídico común no quiebre en sus mismos fundamentos.

Coincido sustancialmente con los autores en su apreciación de la tolerancia, en cuanto que no puede ser tenida propiamente como principio informador de nuestra materia en las sentencias de la jurisprudencia europea (cfr. p. 131). La tolerancia es, desde luego, un cierto hábito democrático, necesario para vivir en una sociedad pluralista, pero no parece que sea un concepto homogéneo respecto al propio de los principios informadores del Estado de Derecho en materia religiosa. Quizá puede calificarse como principio de educación o convivencia democrática. Pero, en todo caso, estamos en otro ámbito de estudio.

Ya en el capítulo tercero, dedicado a los principios de Derecho Eclesiástico del Estado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, al tratar de la libertad religiosa, y concretamente de su contenido principal (pp. 141-147), me parece que lo que ahí se dice resulta confuso para el lector, porque de lo que ahí se habla, de modo principal, es del derecho de libertad religiosa, no del principio.

En ese mismo capítulo, se trata de la relación entre el principio de cooperación y el de aconfesionalidad. No me convence lo que se dice de que el principio de cooperación tiene un carácter compensador o compensatorio del carácter laico del Estado (cfr. pp. 173-

174). A mi entender el principio de cooperación no hace perder cotas de laicidad o aconfesionalidad al Estado. Más bien, la unión del principio de laicidad con el de cooperación configura una razonable laicidad o aconfesionalidad del Estado que no compite ideológicamente con la sociedad, religiosa e ideológicamente plural, sino que está a su servicio.

El libro comentado, en todo caso, tiene méritos suficientes para detenerse en su lectura. La seriedad del trabajo, centrado en una jurisprudencia que abre caminos en el Derecho Eclesiástico europeo, es un buen instrumento de estudio y reflexión.

JOAQUÍN CALVO-ÁLVAREZ

Hervada, Javier, *Tempus otii. Fragmentos sobre los orígenes y el uso primitivo de los términos «praelatus» y «praelatura»*, 2.^a edición, Colección Canónica del Instituto Martín Azpilcueta, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2004, 1 vol. de 268 pp.

Aunque el libro aparece como segunda edición, en realidad la primera, de 1991, fue de tirada muy limitada y resultó poco conocida. Como en su momento no se hizo una reseña en esta revista, sirva ésta de primicia.

El libro aparece como edición corregida, pero las correcciones no afectan a la sustancia del libro, sino a aspectos accidentales de los diálogos, que han sido acortados, así como a algunas digresiones, que han sido suprimidas. Creemos que así el libro gana en fluidez y se simplifica la línea argumental.

El autor, relatando sus investigaciones a lo largo de todo un año en tema de

prelados (en el derecho canónico las prelacías —como se dice en castellano castizo— o prelaturas, en cuanto entes, no aparecen hasta el CIC de 1917), dice que el tema resultó sorprendentemente sencillo; pero el estudio de los orígenes y uso primitivo del término, no lo resulta tanto, al parecer, ya que obliga al autor a no ceñirse a *praelatus*, sino que se ve constreñido a estudiar también la evolución de *antistes* y de *praesul*, al encontrarse con que las tres palabras se fundieron en una —la correspondiente en cada idioma a prelado— al pasar del latín a las lenguas vulgares.

El libro comienza con unos prolegómenos, que son en realidad un planteamiento de la cuestión que se deduce de *praelatus* cuando se compara su significado original en latín clásico —que llega hasta hoy— y su uso eclesiástico derivado con una línea evolutiva propia. En un caso es una forma verbal, participio pasivo de *praeferre*; en otro es un sustantivo, cuyo uso canónico se delimitó, primero, como jerarca eclesiástico con jurisdicción (la *potestas clavium*) y, posteriormente y hasta la actualidad, como Sagrado Pastor con potestad *vere episcopalis* recibida del Papa.

Sigue la parte dedicada a la génesis y uso primitivo de *praelatus*, que comienza con las fuentes. Sorprende gratamente lo completo e inmejorable de estas fuentes: colecciones de autores, diccionarios, léxicos y concordancias. En el fragmento 4 plantea el tema de la diferencia originaria y la posterior concordancia semántica entre *antistes*, *praesul* y *praelatus*, lo que le lleva a estudiar estas tres palabras, desde el latín clásico a la media e ínfima latinidad o latín bajo. El estudio de *antistes* comprende desde la página 45 a la 89; y el de *praesul*, palabra poco usada, de la pá-